

JORGE EDWARDS

CHILE: EL DIFÍCIL RETORNO A LA DEMOCRACIA

El viernes 18 de noviembre del año pasado, a partir de las cuatro de la tarde, la elipse del parque O'Higgins, el antiguo parque Cousiño, el sitio donde se celebran tradicionalmente los desfiles militares de la fiesta nacional chilena, empezó a llenarse con un flujo continuo de manifestantes. El gobierno había ofrecido hacía tiempo ese lugar a la oposición y ésta lo había rechazado. Parecía una trampa gobiernista muy bien organizada. La elipse es un espacio demasiado amplio, de más de 140 mil metros cuadrados. Llenarla era un desafío muy difícil, sobre todo cuando el gobierno cuenta con todos los medios de presión necesarios. Además, es un espacio cerrado, y esto aumentaba las inquietudes de la oposición.

Frente a la falta de alternativas, los dirigentes opositores terminaron por aceptar el terreno que les ofrecía el oficialismo. El acto fue convocado por la Alianza Democrática, que une desde la llamada Derecha Republicana hasta el Bloque Socialista, pasando por los grandes conglomerados de centro: Democracia Cristiana y diversos grupos radicales y socialdemócratas. En la Alianza no participan los comunistas ni las facciones prosoviéticas del socialismo, dirigidas desde el exilio por el ex Ministro de la Unidad Popular Clodomiro Almeyda. Estas, no obstante, acordaron asistir y aceptaron la consigna general, que consistía en no llevar emblemas ni lanzar gritos partidistas: sólo banderas chilenas y llamados de rechazo de la dictadura y de retorno a la democracia.

Lo que hacía dos meses parecía una astucia del gobierno, terminó convertido en un serio boomerang. A las siete y media de la tarde del 18 de noviembre, la elipse del parque, una imagen tradicional para cualquier chileno, estaba repleta de manifestantes. Muchos creen que fue la concentración política más grande de la historia del país. El orador único, Enrique Silva Cimma, jefe del Partido Radical, pidió la "resignación" de su cargo al general Pinochet y reiteró la proposición básica de la Alianza: que se forme cuanto antes una Asamblea Constituyente y que se instale un Gobierno Provisional. Era una situación que no habría podido concebirse cuatro o cinco meses atrás: la culminación de un año de protestas y de toma de conciencia a nivel nacional. Los chilenos habían perdido el miedo. Fueron al parque O'Higgins en masa, en forma notablemente pacífica, sin incurrir en provocaciones de ninguna clase, y se retiraron en orden, con alegría, con la sensación de que el país, ahora sí, había empezado a cambiar de un modo irreversible. Bastaba con mirar a la gente reunida en la elipse. Había señoras de poblaciones, que enarbolaban los retratos de sus hijos desaparecidos, jóvenes de extrema izquierda, obreros del cobre que hacían colectas para sus compañeros despedidos del trabajo, empleados bancarios, intelectuales, estudiantes, caballeros burgueses que habían sido ministros, en el pasado, del gobierno de Eduardo Frei y hasta del gobierno conservador de

Jorge Alessandri.

Todo 1983 ha sido un año de manifestaciones, de protestas crecientes y de apertura tímida, concedida a la fuerza, malhumorada, mañosa, llena de retrocesos. A comienzos del mes de agosto, el gobierno daba la impresión de estar en su punto más bajo. La economía, destruida por una aplicación extraordinariamente dogmática del monetarismo de la escuela de Chicago, no mostraba ningún síntoma de reacción. Muchos simpatizantes del régimen expresaban en público su desengaño, incluso su deseo de un cambio rápido. La protesta popular era cada vez más ruidosa. Había aparecido un líder sindical joven, valiente, dotado de indudable carisma, que la prensa comparaba con Lech Walesa: Rodolfo Seguel. La oposición política sacaba la voz con fuerza en la Alianza Democrática. Empezaban a llegar periodistas extranjeros para cubrir el décimo aniversario del régimen y algunos pensaban que podrían quedarse para presenciar su caída.

En la protesta nacional organizada por la oposición para ese mes de agosto, el gobierno sacó las tropas a la calle y hubo muchos muertos y heridos a bala. En ese momento, el general Pinochet, que actúa con mayor astucia de lo que se piensa en el extranjero, jugó una carta política hábil. Nombró Ministro del Interior a un viejo representante de la derecha tradicional, Sergio Onofre Jarpa, que hasta entonces era embajador en Buenos Aires. Jarpa introdujo de inmediato un lenguaje que los chilenos ya habían olvidado: el de la negociación, el compromiso, el antiguo manejo parlamentario. Habló de diálogo y aceptó la invitación del Arzobispo de Santiago, Juan Francisco Fresno, a sentarse en una mesa a dialogar con los jefes de la Alianza Democrática. La Alianza concurrió a ese primer encuentro, seguido de dos más, con la sola abstención de los socialistas. Las fotografías de Jarpa con los jefes de la oposición sentados en una mesa, bajo la mirada del Arzobispo de Santiago, produjeron una primera sensación de respiro, de distensión, de renovación. Las listas de exiliados autorizados a volver al país fueron largas y se notó cierta liberalización en la prensa y hasta en la televisión.

Las ilusiones duraron bastante poco. Después de la tercera reunión entre Jarpa y la Alianza, el general Pinochet declaró que "esos señores" podían conversar todo lo que quisieran, pero que los plazos establecidos en la Constitución de 1980, que aseguran su presidencia hasta 1989 y permiten reelegirlo, se mantendrían. La Alianza no tuvo más remedio que dar por terminadas las conversaciones, en una situación bastante incómoda, que parecía justificar la abstención inicial de su ala izquierda.

En esas semanas se había podido tener la impresión de que Jarpa era un Ministro del Interior fuerte, dotado de apoyos sólidos en el pinochetismo y que deseaba desempeñar un

papel como figura de la transición. En las conversaciones con los jefes de la Alianza les había pedido insistentemente que tuvieran paciencia, que le dieran tiempo para actuar. Después de la ruptura, pareció que se había retrocedido al punto de partida. Hubo claras demostraciones de un nuevo endurecimiento. Por ejemplo, personas que habían aparecido en las listas de exiliados autorizados a regresar fueron devueltas desde el aeropuerto a sus países de origen.

Se tenía la impresión de que el gobierno recuperaba el poder y de que la oposición perdía la iniciativa. La imagen del Ministro del Interior de la transición se transformaba en la de un personaje domesticado, que utilizaba su vieja astucia parlamentaria para servir mejor a su jefe. Sin embargo, la actual situación chilena es esencialmente cambiante, dinámica, impredecible. El triunfo electoral de Raúl Alfonsín, en Argentina, ya tuvo su efecto estimulante para la oposición democrática, cuyas cabezas se preparan para viajar a las ceremonias de la transmisión del mando, invitadas oficialmente por el presidente electo. Poco tiempo después se produjo la gran manifestación del viernes 18 de noviembre. Sin duda fue un hecho político de primera magnitud, que marcará las etapas próximas. La oposición habla ahora de pasar a un estado de "protesta permanente" y de revivir el proceso histórico de los cabildos abiertos, decisivos en los años de la independencia.

El tema constitucional

Es importante saber algo del marco jurídico y constitucional en que se desarrolla el conflicto chileno. En líneas muy generales, el pinochetismo se aferra a la Constitución de 1980, admitiendo, con diferentes matices, la posibilidad de reformar ese texto y de acelerar algunos plazos. La oposición plantea con toda claridad, de un modo que fue reafirmado en el acto del día 18, la salida de Pinochet y la formación de una Asamblea Constituyente. En este aspecto, se puede sostener que Chile continúa teniendo reflejos de país legalista, a pesar de que sólo conoce una caricatura de estado de derecho. El régimen ha tenido necesidad de levantar esa fachada de legalidad y esto, por sí solo, es significativo. Sin embargo, también es un fenómeno peligroso, de doble filo, que puede conducir a una división insalvable. La guerra civil de 1891, una de las más sangrientas de la historia de América del Sur, tuvo su pretexto y su origen, precisamente, en un problema de interpretación constitucional.

El régimen chileno, en un recurso que ya es clásico, no admite jamás su condición política real. El sistema opresivo consiste, antes que nada, en una manipulación del lenguaje. Se practica el maquillaje y la violencia verbal. No existió "golpe militar" sino "pronunciamiento" de las Fuerzas Armadas. No hay dictadura sino régimen autoritario de origen constitucional. No se admite que la acción política está monopolizada por el gobierno: existe "receso político", en espera de que el país se "normalice". Toda la teoría de la legitimidad del régimen se apoya en la Constitución Política de 1980, aprobada por un plebiscito de ese año.

La oposición hizo la crítica del plebiscito desde el primer instante. Fue un acto enteramente manejado por el gobierno, realizado con la prensa controlada, con la televisión al servicio absoluto del oficialismo, sin partidos políticos, sin verdadera información a los electores. El régimen eligió el momento con habilidad, aprovechando la coincidencia de dos factores: el auge del modelo económico neoliberal y un control policial y político que todavía no mostraba fisuras graves. Eran días en que la política de la zanahoria y del ga-

rrote, con su simple y reconocida eficacia, todavía funcionaba a la perfección. Los frutos de la economía monetarista, neoliberal, representaban, naturalmente, la zanahoria. Pinochet decía que uno de cada siete chilenos podría adquirir pronto un automóvil y que uno de cada cinco podría comprar un televisor y una máquina lavadora. Los palos, a todo esto, variados y feroces, caían sobre el lomo del burro testarudo y opositor.

De hecho, en septiembre de 1980, mientras el voto era secreto, el recuento contó con la relativa garantía de ser público, a pesar de que los integrantes de las mesas receptoras de sufragios habían sido nombrados por las autoridades. El carácter público del recuento fue más o menos real y eficaz, desde el punto de vista del control ciudadano, en los centros urbanos de mayor desarrollo y tradición política. En las mesas del barrio de Ñuñoa, por ejemplo, en Santiago, uno podía pedir que le mostraran los votos y llevar su propia contabilidad. Las cifras oficiales de apoyo a la Constitución, cercanas al 70% de los votos emitidos, fueron exageradas, pero el país interior, en septiembre de 1980, dentro de las condiciones de una propaganda abrumadora, de cierta euforia económica, del exilio de una parte importante de la izquierda, de un miedo generalizado y profundo a disenter, había votado en una relativa mayoría por la Constitución del pinochetismo.

La Constitución entró en vigencia en marzo de 1981, junto con un artículo transitorio que pasará a la historia como símbolo del periodo, el 24, obra maestra de lo que podríamos llamar casuística autoritaria. El famoso artículo 24 transitorio deja en suspenso, en la práctica, la totalidad de las garantías constitucionales, otorgando al gobierno facultades de restringir la libertad de expresión y las principales libertades individuales en forma puramente administrativa, sin admitir, siquiera, la intervención de los dóciles tribunales de justicia. Estos lo hicieron en el caso de los llamados "recursos de protección", una innovación jurídica de la propia Constitución, pero siempre fueron reacios a dictar sentencias que limitaran las facultades amplísimas y discrecionales contempladas en esa disposición. ¡El artículo 24 también había sido aprobado por el pueblo soberano!

En esta forma, a pesar de sus vicios de origen, la Constitución de 1980 presta grandes servicios. En su crisis actual, el pinochetismo encuentra en ella un refugio aparentemente seguro. El gran debate de estos días se centra en el problema de acortar los plazos constitucionales. Es un debate lleno de ambigüedades. Los pinochetistas, incluyendo al Ministro del Interior, parecen aceptar en su mayoría el principio de la reducción de los plazos, pero Pinochet, cada cierto tiempo, anuncia que se cumplirá estrictamente el calendario "aprobado por el pueblo". El populismo, como ha sucedido también en otras latitudes, pasa a ser la última tabla de salvación de la dictadura.

El problema del acortamiento de los plazos, por otra parte, es enfocado de diferente manera por pinochetistas y opositores. Los primeros hablan de adelantar la fecha de instalación del Congreso, prevista para 1990, pero no se refieren para nada a una salida anticipada del Jefe del Estado. Con respecto al Congreso, surgen dos posiciones entre los partidarios del régimen. Algunos, reunidos en la Unión Democrática Independiente, dirigida por el ex Ministro del Interior Sergio Fernández, proponen que se instale pronto un Congreso designado por una Comisión *ad hoc* y ratificado por plebiscito. Aunque parezca extraño, algunos miembros de la oposición centrista no han rechazado esta posibilidad

en forma categórica. El maximalismo del pasado, que causó tanto daño a la democracia chilena, provoca ahora, como reacción, un posibilismo excesivo. Sin embargo, personajes importantes de la derecha, como es el caso de Sergio Diez, antiguo parlamentario del Partido Nacional y ex embajador del régimen militar en las Naciones Unidas, piensan que una elección del poder legislativo sería necesaria para conocer la opinión real del país, sin que las conclusiones de una elección así deriven inevitablemente en "la renuncia del Presidente de la República".

Perspectivas

En resumen, el momento político chileno es extremadamente confuso y cambiante. No se pueden hacer profecías a corto y ni siquiera a mediano plazo. No cabe duda de que el país terminaría por recuperar sus libertades, pero es imposible saber cuándo. Los sectores duros del pinochetismo se aferran al poder y parecen dispuestos a cambiar algo para que no cambie nada. Lo único evidente es que 1983 ha sido el año de la pérdida del miedo en grandes sectores, del despertar de la conciencia, de la invención de formas inéditas y constantemente renovadas de lucha pacífica contra la dictadura.

El dinamismo de las protestas, que culminó en la enorme manifestación de masas de la tarde del 18 de noviembre, se une en estos días al ejemplo contagioso de Argentina. El ambiente está dominado por la nueva situación. Hace dos semanas, los santiaguinos veían y discutían una película sobre Giordano Bruno, el gran heresiarca renacentista, quemado en las hogueras de la Inquisición. Ahora hacen colas para ver *Mephisto*, película de Istvan Szabo que describe la evolución de un actor alemán que partió de la izquierda y se hizo colaborador del régimen nazi. Un año atrás, las conciencias estaban embotadas. En el momento actual se practica una lectura apasionada y lúcida de todos estos mensajes.

Uno de los temas candentes de ahora es el de la inserción del Partido Comunista, que siempre representó en el país una minoría fuerte, con bases obreras e intelectuales, en la política criolla. El PC se ha unido con los socialistas prosoviéticos de Clodomiro Almeyda, ex Ministro del gobierno de Salvador Allende, en el exilio en Alemania Oriental, para formar el Movimiento Democrático Popular. El Bloque Socialista, incorporado a la Alianza, pide públicamente el ingreso de los comunistas. Pero el comunismo chileno, en lugar de abrirse en estos años a posiciones más independientes, menos sectarias, como ocurrió en España en las etapas finales del franquismo, se ha endurecido, ha propiciado la vía violenta de lucha contra la dictadura y se ha alineado con Moscú en forma aparentemente incondicional.

En una respuesta de Gabriel Valdés, presidente de la Democracia Cristiana, a la petición del Bloque Socialista de ingreso de los comunistas, éste sostiene que la presencia del PC en la Alianza "sólo provocaría confusiones, desacuerdos y malos entendidos". Después enumera cuatro discrepancias "esenciales" con el PC, relacionadas con el tema de los derechos humanos, con las instituciones políticas de la democracia futura, con la política internacional, que exigirá una "opción nacional, original e independiente", lo cual supone el rechazo de las "políticas de bloques", y con el problema de los métodos de lucha contra la dictadura. La carta de Valdés asegura que la posición del PC en este último punto es "moralmente errónea y equivocada en el orden práctico".

A pesar de todo, los comunistas acudieron a la manifesta-

ción del parque O'Higgins y estuvieron juntos con los miembros de la Alianza Democrática. No podía ser de otra manera, puesto que el llamado estaba abierto a todos los chilenos que quieren ver el fin de la dictadura. Por lo demás, los comunistas obedecieron en forma disciplinada las instrucciones generales de no llevar emblemas ni consignas de partidos. Sólo se divisaron algunos retratos de Salvador Allende, llevados probablemente por las juventudes socialistas. El ministro Jarpa, de todos modos, aprovechó para declarar que la manifestación había demostrado que "en el fondo la Alianza Democrática y el Partido Comunista actúa en la misma línea, realizan la misma campaña y coinciden en los mismos planteamientos".

A todo esto, ningún análisis de la situación chilena habla en forma seria del papel del Ejército. Lo que ocurre es que el



Ejército, al menos frente al mundo exterior, mantiene un silencio y una disciplina jarárquica totales. El general Fernando Matthei, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, ha manifestado su deseo de que se reduzcan los plazos constitucionales, pero ya hemos visto que la reducción de los plazos, dentro del marco de la Constitución de 1980, es una alternativa aceptada por sectores oficialistas. Muchos generales en retiro adoptan posiciones francamente disidentes, sobre todo con motivo de la nueva ley del cobre, destinada a dar garantías extremas a los capitales extranjeros, pero un oficial en retiro, en el sistema chileno, pierde toda influencia sobre el Ejército activo.

Lo que se ve con claridad, a fines de este primer año de reacción de las bases del país, es división profunda, impa-



ciencia, conflicto creciente, posibilidades no excluidas de nuevos retrocesos. Un plebiscito realizado hoy con un mínimo de honestidad seguramente daría una importante mayoría contraria al régimen. La oposición gana las últimas elecciones de directivas estudiantiles, a pesar del control interno en las universidades. El país está francamente cansado del régimen militar y el cansancio se manifiesta de diferentes maneras en todas las clases de la sociedad. Sin embargo, aunque el pinochetismo probablemente se encuentre en minoría, mantiene fuerza. Tampoco hay signos visibles de crisis en el Ejército.

La situación económica es insostenible, con índices peligrosos de desocupación y con precios internacionales del cobre que obligarán a nuevas reducciones presupuestarias. Ya se vislumbra el sentido de estas reducciones. Baja el presupuesto de las universidades, sobre todo en la investigación científica y en los ramos humanistas, ya drásticamente limitados, y aumentan las subvenciones al fútbol y a algunos programas masivos de la televisión. Las medidas antidemocráticas se adoptan bajo ropaje populista.

El país tiende a dividirse en dos mundos: el de los barrios burgueses y el de las poblaciones hambrientas y desocupadas de las periferias de las ciudades. No se puede negar que es un fenómeno latinoamericano, pero la realidad chilena de hace quince años se caracterizaba por el crecimiento de la clase media. Ahora observamos empobrecimiento y polarización. En la medida en que la reactivación económica no llega, algunos analistas no descartan del todo el fantasma de la guerra civil, que había hecho su aparición en los meses finales del gobierno de Allende. En realidad, existen algunas semejanzas externas entre los meses finales del allendismo y el momento actual, pero concurren dos diferencias esenciales: la actitud del Ejército y la de los sectores financieros internacionales. Chile no soluciona su problema económico interno, pero ha conseguido acuerdos importantes con el Fondo Monetario y con la banca extranjera. Puede que estos acuerdos sólo sirvan para prolongar y profundizar la crisis. En todo caso, le dan tiempo al gobierno y le permiten esperar que la reactivación de la economía mundial empiece a producir efectos en el país.

Se habla mucho de un conflicto latente entre el Ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, que desea una recuperación económica rápida, y el Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, que enmienda los rumbos impuestos por los "Chicago boys" en forma moderada, alcanzando acuerdos sólo sirvan para prolongar y profundizar la crisis. En todo caso, le dan tiempo al gobierno y le permiten especulaciones de prensa. Ambos ministros, en el fondo, dentro de sus respectivos sectores, tratan de ganar tiempo y hasta ahora lo consiguen.

La tesis truculenta de la guerra civil parece menos realista que la de un descontento cada vez mayor, más desesperado, que hará aumentar en el país los brotes ya muy extendidos de anarquía. ¿Podrá imponerse, todavía, un mínimo de razón? ¿Se volverá al diálogo? Enrique Silva Cimma, en declaraciones posteriores a su discurso del día 18, no lo excluye en forma absoluta. ¿Es posible una salida pacífica en el Chile de hoy sin concesiones mutuas muy importantes? Son preguntas difícilísimas, preguntas que todavía no tienen ni un comienzo de respuesta. Ellas se replantean a cada rato en una situación dinámica, que tiene vuelcos sorprendentes, dentro de un evidente proceso de aceleración histórica y de salida del país real, que siempre amó su sistema democrático de vida, desde las catacumbas a la superficie.